



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN  
SALA CIVIL

Medellín, trece (13) de abril de dos mil veintitrés (2.023)

MAGISTRADO: JOSÉ OMAR BOHÓRQUEZ VIDUEÑAS  
APELACIÓN DE AUTO: 05001 31 03 021 2021 00413 03

Proceso: Declarativo – responsabilidad civil extracontractual.  
Demandantes: LIZETH JOHANA LÓPEZ SILVA y otros  
Demandados: JORGE IVAN JARAMILLO PÉREZ y otro.  
Extracto: Para la contradicción del dictamen pericial acudimos al artículo 228 del C. G. del P., es decir, nos atenemos a norma expresa sin necesidad de aplicaciones analógicas. Confirma.

ASUNTO A TRATAR

Se resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra el auto calendado el seis (6) de septiembre de dos mil veintidós (2.022), proferido por el JUZGADO VEINTIUNO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD de Medellín.

ANTECEDENTES

En su oportunidad la codemandada SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., arrimó el dictamen pericial denominado *“reconstrucción de accidente de tránsito”*, el cual se puso en conocimiento de las partes, a lo que la parte actora asumió dos posiciones: primera, deprecó que los peritos que elaboraron tal la experticia, comparecieran a la audiencia de instrucción y juzgamiento; y, segunda, anunció que aportaría otro peritaje, solicitando un tiempo

05001 31 03 021 2021 00413 03

prudencial, que estimó en veinte (20) días hábiles para allegarlo, debido a que sus poderdantes tendrían que conseguir los recursos económicos para lo pertinente<sup>1</sup>.

En el auto atacado se sostuvo que los peritos tienen el deber de acudir a la vista pública, pero en relación al plazo adicional solicitado, lo negó, indicando su improcedencia conforme el artículo 228 del C. G. del P., y que la falta de recursos no es causal para ampliar el término<sup>2</sup>.

Al respecto la demandante presentó los recursos de reposición y en subsidio apelación, aduciendo que se trata de una interpretación arbitraria que afecta la contradicción de la prueba, teniendo derecho a presentar probanzas y a contradecir las allegadas en su contra, siendo esa una garantía fundamental del debido proceso, aunado a que conforme al artículo 227 procesal civil, se puede anunciar el aporte de la experticia, y el término de tres (3) días es corto para lo propio, máxime considerando las restricciones económicas de sus prohijos, debiéndose tener una lectura sistemática de los artículos 227 y 228 ídem, debiéndose procurar la igualdad real entre las partes<sup>3</sup>.

Vía horizontal el *a quo* mantuvo la decisión, explicando que con la demanda y la contestación se puede anunciar un dictamen, así lo dispone el artículo 227 del C. G. del P., pero no ocurre lo mismo con la contradicción, para la cual el artículo 228 del mismo ordenamiento consagra el término de tres (3) días.

Así, que aplicó correctamente las normas procesales, sin que la falta de recursos económicos sirva para extender términos; además, la parte actora goza del beneficio del amparo de pobreza, por lo que bien pudo solicitar la designación de un perito auxiliar de la justicia para la

---

<sup>1</sup> Ver archivos 30, 33 y 34 en el Expediente Digital.

<sup>2</sup> Archivo 36 ídem.

<sup>3</sup> Archivo 37 de igual expediente.

05001 31 03 021 2021 00413 03

contradicción del dictamen, caso en el cual no se presentaba impedimento alguno con el término del citado artículo 228 procesal, pero como ello no ocurrió, expiró la oportunidad procesal.

Previo trámite de queja favorable al recurrente se concedió la apelación, la que se resuelve de plano, previas:

### CONSIDERACIONES

De entrada valga precisar que en las diligencias que nos ocupa, desde el 2 de diciembre pasado se profirió sentencia que resolvió de fondo la primera instancia, e incluso, en auto del 14 de febrero hogaño esta Corporación admitió la alzada frente a la misma, la cual fue incoada por la parte actora y hoy también recurrente, dada la desestimación de sus pretensiones.

Lo anterior conllevaría a aplicar el inciso 7º del numeral 3º del artículo 323 del C. G. del P., regla que reza; “*En caso de apelación de la sentencia, el superior decidirá en esta todas las apelaciones contra autos que estuvieren pendientes, cuando fuere posible.*” (subrayado intencional); sin embargo, en este caso no es viable unificar las decisiones en una misma providencia, dado que una es paso previo a las otras, en la medida que dentro de la dinámica del proceso los periodos probatorios se agotan antes de decidir de fondo.

En este caso, cuando el *a quo* resuelve la instancia pese a estar pendiente la decisión en alzada de una decisión probatoria, no es aspecto que infrinja el ordenamiento, ya que hay que recordar que, “*La circunstancia de no haberse resuelto por el superior recursos de apelación en el efecto devolutivo o diferido, no impedirá que se dicte la*

05001 31 03 021 2021 00413 03

*sentencia...*”, tal como lo regula el inciso penúltimo del artículo citado en el párrafo anterior, eso sí, con la precisión que este Tribunal hiciera dentro de las presentes en el auto del 28 de febrero hogaño.

De otro lado, debe recordarse que conforme el artículo 320 del C. de G. del P., la alzada busca que el Superior funcional estudie el asunto decidido en primera instancia, con el fin de revocarlo o reformarlo, sentido en el cual se dirigirá el siguiente análisis, ello dentro del principio de la limitación que impone dicha norma y el artículo 328 *ibidem*, donde en las presentes y como lo hemos anunciado, nos circunscribiremos al tema probatorio puesto de presente.

El artículo 164 del C. de G. del P., establece; “*Toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso.*”, donde con la prueba se verifica o confirma los supuestos de hecho expresados por las partes, por lo que los interesados pueden aportar los medios establecidos en el artículo 165 procesal civil o cualquier otro para obtener el efecto jurídico perseguido.

En cuanto al dictamen pericial, con él se persigue allegar al proceso información especializada o científica no manejada por el Juez, quien debe atender las reglas establecidas en el artículo 226 del C. G. del P., existiendo reglas precisas en cada una de las fases, esto es, incorporación, decreto, práctica y contradicción, y valoración.

En lo tocante a la incorporación, conforme al artículo 227 del mismo ordenamiento, la parte que pretenda valerse de una experticia deberá aportarla en la respectiva oportunidad (artículo 173), esto es: para el demandante, con la demanda o en el término para solicitar las adicionales según los artículos 82 y 370 *ídem*; y para el demandado, con la contestación conforme el artículo 96 de tal Estatuto Procesal. En

05001 31 03 021 2021 00413 03

cualquiera de esos eventos, puede considerarse el término que trata el artículo 227 en referencia.

En cuanto al decreto, atendiendo a los principios de pertinencia, conducencia y utilidad de las pruebas, así como la misma economía procesal, dentro de la dirección judicial el funcionario puede abstenerse de decretar la práctica de pruebas pedidas, pero siempre respetando el derecho fundamental a la defensa de las partes y el debido proceso, tal como lo establece el artículo 168 procesal civil.

Referente a la práctica, dentro de lo que está la contradicción, el artículo 228 señala que la parte contra la cual se aduzca el dictamen, puede: i) solicitar la comparecencia del perito a la audiencia de instrucción y juzgamiento; ii) aportar otra experticia; y iii) efectuar ambas actuaciones. Sobre lo que volveremos más adelante.

La valoración será en la sentencia, bajo las reglas de la sana crítica, examinándose la solidez, claridad, exhaustividad, precisión y calidad de los fundamentos, la idoneidad del perito y su comportamiento en la audiencia, tal como se deriva del artículo 232 procesal civil.

### **De la solución al caso concreto:**

El dictamen pericial arrimado por SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., se puso en conocimiento a través de auto del 17 de agosto de 2.017, y dentro de su ejecutoria la parte actora pidió la concurrencia de los peritos a la audiencia de instrucción y juzgamiento, sobre lo que no hay discusión.

05001 31 03 021 2021 00413 03

Igualmente la demandante, aunque no aportó otra experticia, anunció que lo haría, precisando que estaba “*acopiando los recursos económicos para tal fin*”, por lo que solicitó “*un tiempo prudencial de 20 días hábiles para allegarlo*”, esto último fue lo negado por el *a quo*.

El asunto gravita sobre la contradicción del dictamen pericial, por lo que para resolver consideramos el artículo 228 del C. G. del P., el cual reza:

**“Artículo 228. Contradicción del dictamen.** *La parte contra la cual se aduzca un dictamen pericial podrá solicitar la comparecencia del perito a la audiencia, aportar otro o realizar ambas actuaciones. Estas deberán realizarse dentro del término de traslado del escrito con el cual haya sido aportado o, en su defecto, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de la providencia que lo ponga en conocimiento.*” Subraya adrede.

Así, de cara a la contradicción de una experticia, la norma transcrita no genera equívocos, ambigüedades o confusiones, en el sentido que la parte contra la que se aduzca un dictamen tiene las opciones que no son excluyentes entre sí, las que deben realizarse dentro del término ahí dispuesto, esto es, en el de traslado del escrito que incorpora la experticia, o en los tres (3) días siguientes a la notificación de la providencia que lo pone en conocimiento.

De lo anterior se concluye que existiendo norma específica, no es del caso hacer otras interpretaciones, por lo que el interesado dejó pasar la oportunidad procesal para proceder de conformidad, de donde la decisión del *a quo* resulta acertada, pues no era del caso conceder términos adicionales, en la medida que las actuaciones que marcan la contradicción pericial tienen un límite temporal.

Con lo anterior no se afectan garantías fundamentales, pues se trata de una norma procesal, de orden público y de obligatorio cumplimiento (artículo 13 procesal civil), y como no se advierte vacío o deficiencia no hay lugar a la aplicación analógica de otras disposiciones.

05001 31 03 021 2021 00413 03

Con la censurada decisión tampoco se desconoce la igualdad entre las partes, pues pese a que la actora goza del beneficio de amparo de pobreza<sup>4</sup>, pudo hacer la solicitud que contempla el numeral 2º del artículo 229 del C. G. del P., cuestión que no hizo, dejando pasar la oportunidad pertinente para tales efectos.

Entonces, si bien el juzgador tiene el deber de garantizar la igualdad entre las partes (artículo 42.2 del G. G. del P.), también lo es que no puede romper el equilibrio para privilegiar a una sobre otra, máxime cuando de lo que se trata es de la actuación en el momento procesal oportuno, ya que debe recordarse que *“Los términos señalados en este código para la realización de los actos procesales de las partes y los auxiliares de la justicia, son perentorios e improrrogables, salvo disposición en contrario.”*, según lo regula el inciso 1º del artículo 117 del ordenamiento procesal civil.

En este caso, el proceso se ha adelantado con observancia de las leyes que lo regulan, y de cara a las oportunidades probatorias, han existido por igual para ambos extremos procesales.

Por todo lo anterior la decisión apelada se confirmará. Sin costas.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín;

## RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR el auto calendado el seis (6) de septiembre de dos mil veintidós (2.022), proferido por el JUZGADO VEINTIUNO CIVIL DEL CIRCUITO de Medellín.

---

<sup>4</sup> Ver numeral 3º auto admisorio de la demanda, archivo 03 cuaderno 1ª instancia.

05001 31 03 021 2021 00413 03

SEGUNDO: Ejecutoriada la presente providencia, sígase con el trámite de la entrada 01, que corresponde con la apelación de sentencia. Sin costas.

Notifíquese;

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'José Omar Bohórquez Vidueñas', written in a cursive style.

JOSÉ OMAR BOHÓRQUEZ VIDUEÑAS  
MAGISTRADO